



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección General de Presupuesto y Contabilidad

“2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”

Oficio DGRM/DT-277-2023
Oficio DGPC/08/2023-1146

Asunto: Clasificación CT-CI/A-31-2023 / Solicitud de Información con folio 330030523001549.

Ciudad de México a 6 de septiembre de 2023.

Maestra Selene González Mejía

Secretaria de Seguimiento del Comité de Transparencia

P r e s e n t e:

Hacemos referencia a la resolución del Comité de Transparencia CT-CI/A-31-2023, comunicada con el oficio CT-476-2023, en el que se solicita a la Direcciones Generales de Recursos Materiales (DGRM), y de Presupuesto y Contabilidad (DGPC), un informe conjunto sobre diversos aspectos relacionados con la atención de la solicitud de acceso a la información con folio **330030523001549**, la cual es del tenor siguiente:

Solicito toda la expresión documental relacionada con las penas convencionales impuestas a contratistas y proveedores del 1 de diciembre de 2018 al 19 de junio de 2023. Solicito el nombre y razón social de las personas físicas y morales que incumplieron cláusulas en contratos de obras, servicios relacionados con obras, adquisiciones y arrendamientos, por lo que sus contratos fueron rescindidos del 1 de diciembre de 2018 al 19 de junio de 2023. Solicito los nombres y razones cuales de las personas físicas y morales acreedoras a penas convencionales impuestas a contratistas y proveedores del 1 de diciembre de 2018 al 19 de junio de 2023.

Solicito los contratos, convenios y anexos con las personas físicas y morales de las que se derivaron penas convencionales impuestas a contratistas y proveedores del 1 de diciembre de 2018 al 19 de junio de 2023.

V176GvHNMONIQ3h45Gyy7SQXvOPC3Kq64rpVgJoPWU=



Al respecto, se rinde en el informe conjunto solicitado en los siguientes términos:

Con el fin de coadyuvar en la comprensión de los alcances tanto de la solicitud que se atiende como de las respuestas que corresponde otorgar a estas áreas obligadas, se realizan las aclaraciones siguientes:

La DGRM manifiesta que el procedimiento de aplicación de penas convencionales en las contrataciones hechas al amparo del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹, se lleva a cabo de la siguiente manera:

El artículo 172 establece que la Suprema Corte puede imponer penas convencionales a proveedores, prestadores de servicios o contratistas en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La pena se ajustará proporcionalmente al porcentaje de incumplimiento. Si no se otorga una prórroga para cumplir los plazos establecidos, se aplicará una pena por atrasos en la entrega de bienes, servicios o ejecución de trabajos. Esta pena se calcula como el 1% diario sobre el monto pendiente de entregar, sin exceder el 30% del total del contrato.

Las penas convencionales pueden descontarse del monto pendiente de pago por parte de la Suprema Corte al proveedor o contratista, y también pueden hacerse efectivas mediante las garantías otorgadas.

Las Áreas responsables de administrar los contratos (determinados en cada uno de los contratos y que corresponden o son coincidentes con las áreas unidades solicitantes de los bienes, servicios o arrendamientos contratados) son las que tienen la responsabilidad de identificar los incumplimientos, cuantificar las penas

¹ Consultable en: <https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/marconormativo/public/api/download?fileName=aga-xiv-2019-adquisiciones-contrataciones-scn.pdf>



convencionales y solicitar la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) para hacer efectivas las mismas.

Las Áreas contratantes, esto es, la DGRM o la Dirección General de Infraestructura Física o el titular de la Casa de la Cultura Jurídica correspondiente, son responsables de hacer efectivas las penas convencionales y deben ingresar el monto correspondiente a la Dirección General de la Tesorería (DGT) o aplicarlo como nota de crédito a los montos pendientes, que para tales efectos serán aplicados por la DGPC.

Por otra parte, el procedimiento de rescisión de contratos en virtud de incumplimiento se rige por el artículo 152 del AGA XIV/2019. En caso de que un proveedor o contratista no cumpla sus obligaciones, el órgano competente para autorizar el procedimiento de contratación puede iniciar la rescisión administrativa sin necesidad de acción judicial. El proveedor puede solicitar por escrito una prórroga para subsanar el incumplimiento, sujeta a aprobación. Si la prórroga no es aprobada o el incumplimiento persiste, se procede con la rescisión y aplicación de sanciones contractuales y garantías. El procedimiento de rescisión se inicia con una notificación al proveedor por parte del Área contratante, seguido de su respuesta y evaluación por parte del área correspondiente -Áreas contratantes para montos menores a 25,000 UMAs y CASOD² para montos mayores. La decisión de rescindir se comunica de manera fundada y motivada al proveedor, quien puede enfrentar sanciones y pérdida de garantías.

Ahora bien, una vez explicados los procesos establecidos en la normativa de este Alto Tribunal, se remite el siguiente informe con relación a lo solicitado por el Comité de Transparencia:

1. Respecto de “expresión documental relacionada con las penas convencionales impuestas a contratistas y proveedores del 1 de diciembre de 2018 al 19 de junio de 2023”, particularmente “de los informes rendidos

² Se refiere al Comité de Adquisiciones y Servicios, Obra y Desincorporaciones.



(y sus anexos) por la DGRM y por la DGPC, no se advirtió dato alguno sobre la solicitud de opinión jurídica dirigida a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y, la opinión, lo cual se prevé en el artículo 172 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, por tanto, es necesario que se pronuncien por la disponibilidad y, en su caso, clasificación de las solicitudes de opinión y, de las propias opiniones a que se hace referencia”, se informa:

Como se mencionó con anterioridad, el artículo 172, párrafo noveno del AGA XIV/2019 señala que son las Áreas responsables de la administración del contrato a quienes les corresponde solicitar la opinión de la DGAJ.

En ese sentido, la DGRM sólo pediría la opinión referida en los casos de los contratos que le corresponde administrar, y presenta como **Anexo 1** al presente oficio las consultas hechas a la DGAJ, que obran en sus registros correspondientes al proveedor Uninet, S.A. de C.V. durante 2019; y Digilogics, S.A. de C.V. durante 2022.

Por su parte, la DGPC manifiesta que, conforme a sus atribuciones, no le corresponde emitir pronunciamiento sobre las solicitudes de opinión.

- 2. En lo que concierne al “nombre y razón social de las personas físicas y morales que incumplieron cláusulas en contratos de obras, servicios relacionados con obras, adquisiciones y arrendamientos, por lo que sus contratos fueron rescindidos del 1 de diciembre de 2018 al 19 de junio de 2023”.**

La DGRM presenta como **Anexo 2** al presente oficio, el listado de contrataciones que han sido rescindidas durante el periodo solicitado, esto es, entre diciembre de 2018 y el 19 de junio de 2023. Se hace la aclaración que para los siguientes periodos no se rescindieron contratos: diciembre de 2018, 2020 (todo el año) y entre el 1 de enero al 19 de junio de 2023, resultando aplicable el Criterio reiterado y vigente SO/014/2017



“Inexistencia”, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por su parte, la DGPC manifiesta que, conforme a sus atribuciones, no le corresponde emitir pronunciamiento sobre los contratos rescindidos.

- 3. En cuanto a los “nombres y razones cuales de las personas físicas y morales acreedoras a penas convencionales impuestas a contratistas y proveedores del 1 de diciembre de 2018 al 19 de junio de 2023”. [sic], en el entendido de que se pretendan conocer las razones por las cuales se impusieron dichas penas.**

Las Direcciones Generales Recursos Materiales y de Presupuesto y Contabilidad presentan como **Anexo 3** al presente oficio, el listado de penas convencionales aplicadas para el periodo solicitado, incluyendo las razones para imponer la pena convencional.

- 4. Por lo que se refiere a la parte del requerimiento en cuanto a: De lo señalado en el anexo del informe de DGRM, en relación con el diverso remitido por la DGPC se advierten inconsistencias, conforme se menciona enseguida:**

- Como observaciones se visualizan “Anulado en 2018”, “en SIA no hay sanciones”, “no hay sanción”, “hay otra sanción”, “se duplica”, “no se tiene solicitud de aplicar sanción”, entre otras. Sin que se proporcionen mayores elementos para que este Comité pueda emitir un pronunciamiento de manera integral.

Al respecto, se informa que ambas áreas han revisado y validado exhaustivamente sus respectivas informaciones. Como resultado de este proceso de revisión y consolidación, podemos confirmar que cualquier discrepancia previamente identificada



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección General de Presupuesto y Contabilidad

ha sido resuelta y el listado final se encuentra en el documento que se presenta como **Anexo 3** al presente oficio.

Por lo anterior, se solicita atentamente dar por atendida la solicitud de acceso a la información de referencia, en el ámbito de competencia de estas Direcciones Generales.

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Maestra Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada
Directora General de Recursos Materiales

Maestro Rodrigo Cervantes Laing
Director General de Presupuesto y Contabilidad

Actividad	Nombre del servidor público	Cargo	Rúbrica
Revisó	Licenciada Ana Luisa Hernández Angeles	Directora de Transparencia, Archivos y Riesgos	

Respuesta al Turno: 3303- 2023

C.c.p.- Maestra Gisela Morales González
Oficial Mayor

C.c.p.- Lic. Ricardo Alfredo Peralta Martínez
Secretario de Seguimiento de Comités

V176GvHNMONIQ3h45Gyy7SQXvOPC3Kq64rpVgJoPWU=